

Registro Nro. 1286/24

///nos Aires, 24 de octubre de 2024.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada de manera unipersonal la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por el señor juez Daniel Antonio Petrone para resolver acerca del conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de esta ciudad en el presente legajo n° **CPE 439/2024/TO1/11/CFC1** del registro de esta Sala I, caratulado "**V [REDACTED], Roberto Maximiliano y otro s/incidente de incompetencia**".

Y CONSIDERANDO:

I. Que, en fecha 8 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, integrado de manera unipersonal por el juez Diego García Berro, resolvió: "**(I). DECLARAR LA INCOMPETENCIA** de [ese] tribunal para entender en las presentes actuaciones, en razón de la materia" (las mayúsculas y lo destacado obra en el original).

Para así decidir, el juez mencionado comenzó por señalar que "(c)onforme el requerimiento formulado en la presente causa por el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente en la instancia anterior, se les imputó a Roberto Maximiliano V [REDACTED] y Hernán Ricardo S [REDACTED] el haber puesto en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal" y que "(e)l hecho aludido [...] fue calificado [...] con las previsiones del art. 303, inc. 1 del C.P., y fue endilgado a los nombrados [...] en carácter de coautores".

Seguidamente, explicó que "(p)or la ley Nro.

Fecha de firma: 24/10/2024

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39301491#432407831#20241023131312998

figura en cuestión, no se reguló específicamente el Fuero que debía conocer en esta clase de ilícitos; por otra parte, de ninguna otra ley surge específicamente dicha aclaración".

De igual modo, refirió que "(n)o parece haber lugar para la controversia en torno al carácter federal del delito de que se trata puesto que ha sido incorporado [...] dentro del TITULO XIII del LIBRO SEGUNDO del Código Penal que se refiere a los 'Delitos contra el orden económico y financiero'".

En esa línea, ponderó que "(e)n tanto el delito previsto por el art. 303 del C.P. se prevé como un delito contra el orden económico y financiero, la competencia de la Justicia Federal deriva de los arts. 32 y 33 inc. 'c', del C.P.P.N".

Por otra parte, tuvo en cuenta que "(e)n relación a los Tribunales Orales en lo Penal Económico, por ninguna norma legal se establece, ni genérica ni específicamente, competencia en razón de la materia para la intervención en esa clase de delitos" y citó jurisprudencia del alto Tribunal y de esta Cámara Federal de Casación Penal que consideró aplicable al caso en respaldo de su postura.

Asimismo, agregó que "(e)n el caso en concreto no se advierte que el proceso se encuentre en un estado significativamente avanzado, por lo que la declaración de incompetencia [...] de ningún modo implicaría una dilación perjudicial para el avance del proceso, máxime si se recuerda que la causa fue elevada en forma reciente a la etapa de juicio oral, donde ni siquiera se cumplió con el primer paso relevante de esta etapa, que resulta ser la citación de las partes a juicio en los términos del art. 354 del C.P.P.N."



Por último, resaltó que tampoco surgen motivos que justifiquen la intervención de ese tribunal "(c)omo ocurrió en otros expedientes, [...] cuando el hecho de lavado de activos concurría en forma ideal con un delito de competencia de este fuero penal económico [...], o cuando se trataba de un concurso real de delitos conexos [...], en aras de lograr una mejor y más pronta administración de justicia".

II. Recibidas las actuaciones en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de esta ciudad, en fecha 29 de agosto de 2024, el señor juez Germán Andrés Castelli resolvió: "**(N)O ACEPTAR LA COMPETENCIA** atribuida [...] y devolver las actuaciones a su tribunal de origen, invitando [...] a que en caso de no compartir los argumentos expuestos eleve a la Cámara Federal de Casación Penal, a fin de que dirima la controversia planteada" (las mayúsculas y el destacado pertenecen al original).

En su decisión, el citado magistrado realizó un repaso del trámite de la causa y explicó que corrida la vista al Ministerio Público Fiscal éste dictaminó que "(c)orresponde a [ese] Tribunal entender en las presentes actuaciones, en tanto se trata de un delito contra el orden económico y financiero que otorga la competencia de la Justicia en lo Criminal Federal que deriva del art. 33 inc. `c´, del C.P.P.N."

De seguido, sostuvo que "(s)i bien resulta evidente la naturaleza federal del delito de lavado de activos, ello no descarta [...] la competencia del Tribunal declinante para conocer en el presente proceso".

A su vez, argumentó que "(l)a competencia del Fuero en lo Penal Económico es de naturaleza mixta, lo que implica que conoce en delitos comunes -balances falsos y libramientos de cheques indebidos, arts. 300 y 302 del CP,



respectivamente- y delitos federales -contrabando, delitos cambiarios y evasión fiscal- cuyo conocimiento les ha sido específicamente atribuido". A lo que agregó que "(l)a competencia federal restringida del [mencionado fuero] aún no descarta sus facultades jurisdiccionales para entender respecto de este tipo de conductas".

En punto a ello, citó jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Penal Económico en lo que hace a la atribución de la competencia de ese fuero respecto del delito en trato.

De otra parte, destacó que "(P)onderar que el bien jurídico tutelado - orden económico y financiero- es atribuible exclusivamente a la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal, contradice, a [su] modo de ver, que no se encuentra controvertido que la competencia del [F]uero Penal Económico también vela por los intereses estatales de orden económico y financiero".

Además, remarcó que se debe "(a)pelar [...] a los principios y garantías procesales, como lo son el estado avanzado del trámite del expediente y la indebida dilación procesal a partir de la garantía de ser juzgado en plazo razonable".

De esa manera, concluyó que "[esos] argumentos resultan de aplicación directa en el caso, donde la causa tramitó íntegramente ante el fuero en lo Penal Económico, desde la prevención que la originó; inclusive el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2, tras darle ingreso al expediente, continuó con su tramitación; al punto tal que espontáneamente una de las defensas presentó un ofrecimiento de prueba, más allá de no haberse librado la citación del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación".



Finalmente, señaló que "(L)a inconveniencia de la declinatoria se observa no sólo en las circunstancias apuntadas, sino en la dilación que genera el presente conflicto de competencia".

III. Devueltos los actuados al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, el señor juez Diego García Berro mantuvo el criterio esbozado en el primer pronunciamiento y, en fecha 16 de septiembre de 2024, resolvió: "**(I). INSISTIR EN LA INCOMPETENCIA** de [ese] Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 [...]. **II. DAR POR TRABADA LA CONTIENDA NEGATIVA DE COMPETENCIA** para intervenir en las presentes actuaciones, entre [ese] Tribunal y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de esta ciudad. **III. REMITIR** el respectivo incidente [...] a la Excma. Cámara Federal de Casación Penal a efectos de que dirima el conflicto aquí planteado (confr. art. 30 bis, inc. 1° del C.P.P.N.)" (las mayúsculas y los destacados obran en el original).

Para resolver en ese sentido, el juez reiteró los argumentos de su anterior decisión a los que se remitió.

Hizo hincapié en que "(l)os fundamentos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 no conmueven aquéllos en los que se sustentó el pronunciamiento de [ese] Tribunal" y en que "(c)on respecto a la competencia en razón de la materia [...] [ese] fuero Penal Económico [...] interviene en el conocimiento de los delitos cuya competencia material y territorial le fue atribuida por ley, circunstancia que no se verifica en autos".

Aunado a ello, que "**(l)a causa fue elevada en forma reciente a la etapa de juicio oral, por lo que es evidente que ambos tribunales en conflicto tienen el mismo mínimo conocimiento del asunto y se encuentran e[n] idénticas condiciones para la continuación de la causa en dirección al debate**" (el destacado pertenece al original).



IV. Una vez radicada la causa en esta Sala I, se confirió la vista pertinente al señor Fiscal General, doctor Javier Augusto de Luca, quien postuló que "(c)orresponde atribuir la competencia al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2".

Para así dictaminar consideró que "(r)esulta incontrovertible que el posible delito que se está investigando o juzgando en esta causa es federal [...], pero es preciso tener en cuenta que el fuero en lo penal económico también reviste esa característica, y ejerce esa jurisdicción en el ámbito territorial que le ha sido asignado (Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires que rodean a la primera). Luego, prima su especialidad en función de las constancias probadas en la causa y la calificación atribuida a los hechos. Por lo tanto, y dado que en la Capital Federal se cuenta con un fuero con un mayor grado de especialidad en torno a la investigación y juzgamiento de los delitos contra el orden económico corresponde que continúe conociendo la justicia en lo Penal Económico".

De otro lado, agregó que "(n)o se advierte la concurrencia de otros delitos de índole federal que justifiquen la intervención de un fuero de competencia más amplia".

V. Llegado el momento de resolver, e independientemente de lo postulado por el Fiscal General, de conformidad con los fundamentos expuestos por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, los que comparto, en lo sustancial, y a los que me remito por razones de brevedad, corresponde declarar la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 para intervenir en la causa que originara la presente incidencia.

Por ello, **RESUELVO:**

Fecha de firma: 24/10/2024

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



DECLARAR COMPETENTE al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de esta ciudad para intervenir en la causa que originara la presente incidencia.

Regístrese, notifíquese al señor Fiscal General ante esta Cámara y comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/19 CSJN). Hágase saber de lo aquí resuelto al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 y déjese constancia de ello. Remítase al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de esta ciudad mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Daniel Antonio Petrone. Ante mí: Walter Daniel Magnone.

